



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL CON CARGO A LA DIRECCIÓN GENERAL INFANCIA FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD”

Los menores con medidas de protección de Guarda o de Tutela acordadas por la Comisión de Tutela del Menor están acogidos por la Dirección General Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad en Centros Residenciales que, bien son propios y son gestionados directamente por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, o bien son contratados y están gestionados por Entidades.

- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como la Ley 6/1995, de Garantías de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad de Madrid, destacan como principio rector de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor. La segunda de las leyes mencionadas establece en sus artículos 56 y 63 que la tutela y la guarda podrán ejercerse por la Administración mediante la atención a los menores en centros residenciales. Asimismo, el artículo 66 contempla el derecho de los menores residentes en Centros Residenciales a acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que demanda el adecuado desarrollo de su personalidad y que no sean satisfechas por el propio Centro.
- La Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que tiene como objeto introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y la adolescencia, que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio nacional, introduciendo una mejora en los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del artículo 39 de la Constitución Española, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad.
- La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, desarrolla y refuerza el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, dotando de contenido el citado concepto. Así, en el capítulo I artículo 2.2) recoge “La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas”.
- La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo objeto es garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

El trabajo en el ámbito de la infancia protegida es de una extraordinaria complejidad, pues atañe a la vida cotidiana, al trabajo destinado a la normalización e integración de los menores, y a la resolución de situaciones de crisis.

Los menores que residen en centros de Protección han pasado, en su mayoría, por múltiples carencias afectivas, psicológicas y de cuidados materiales. Los menores a los que se destina este contrato serán aquellos que están en acogimiento residencial y precisan evaluación y tratamiento psicológico y la Administración debe garantizar la respuesta a sus necesidades, y responder a ellas con criterios de calidad.



A la mayoría de los menores les cuesta abrirse y expresar sus sentimientos en el centro residencial, ya que temen muchas veces que lo que cuenten sea conocido por todos, por lo que con este contrato se contribuirá a tener un espacio externo al centro y generar en los gabinetes (dependientes del contrato) un espacio en el que los menores podrán expresar sus sentimientos amparados en la confidencialidad, creándose un espacio terapéutico facilitador del cambio, en el que se ofrecerá un ambiente íntimo de privacidad, seguridad y confort, que facilite tanto la relación terapéutica como el desarrollo de la terapia.

El trabajo con estos menores, requiere de una secuenciación en el tiempo para dar respuesta a sus necesidades y características, desarrollando un plan terapéutico individual elaborado para cada menor, por lo que se precisan figuras profesionales estables, que conozcan sus necesidades y a las que puedan trasladar sus sentimientos, pensamientos, emociones, dificultades para que así desde un espacio terapéutico de reflexión se les pueda ayudar. Se precisa una intervención terapéutica que se pueda programar para cada menor con la frecuencia que requieren, sin que los tiempos en los que se preste esa atención se dilaten por otro tipo de cuestiones externas.

Se contempla también en este contrato el asesoramiento y apoyo a los equipos de las residencias, para abordar en las residencias la problemática clínica de menores concretos, intervención en situaciones críticas que afecten a la residencia. Frecuentemente, los miembros de los equipos multidisciplinar pueden experimentar dificultades en el trabajo con algunos perfiles de niños, siendo la supervisión por profesionales externos una herramienta basada en la formación, apoyo y cuidado al profesional, útil para solventar los conflictos del trabajo diario.

Asimismo, se prestará atención inmediata a adolescentes embarazadas, en relación con su estado de gestación, atendiendo lo establecido en la ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y el Protocolo de la Dirección General de Infancia Familia y Fomento de la Natalidad, tratándose de intervenciones que requieren inmediatez en el tiempo y que con este contrato se quiere garantizar que sea así, cumpliendo lo establecido legalmente.

Teniendo en cuenta la actual situación de demanda de atención a menores con medida de protección, que ha crecido durante el período de la crisis sanitaria y para evitar la cronificación de las secuelas, es preciso ofrecer un tratamiento terapéutico ambulatorio que dé respuesta a su necesidad de ayuda psicológica, y en virtud de lo establecido en las normas citadas, la Dirección General de la Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad está obligada a prestarla al objeto de dar cumplimiento a las funciones que esta Dirección General tiene encomendadas, pero no lo puede hacer con sus propios medios, por lo que ha de recurrir a una contratación externa.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se propone la tramitación de un contrato de servicios "evaluación y tratamiento psicológico de menores en acogimiento residencial", atendidos con cargo a esta Dirección General.

Madrid, a la fecha de la firma

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFANCIA,
FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

Fdo.: Alberto San Juan Llorente

